



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-00558
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: LUIS ALFREDO BARRERA SALINAS
OPOSITOR: KELLOGGS DE COLOMBIA S.A.

En el presente asunto, el señor **LUIS ALFREDO BARRERA SALINAS**, promovió demanda laboral en contra de **KELLOGGS DE COLOMBIA S.A.**, con la finalidad de obtener en primer lugar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y en segundo lugar, el reconocimiento y pago de la indemnización contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo conocido el asunto en un primer término por el Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, el cual a través de proveído adiado 15 de noviembre de 2018, ordenó la remisión del presente asunto por competencia a los Juzgados Administrativos de Bogotá (fl. 74).

Ahora bien, arribado el expediente a este despacho judicial por reparto, y luego de examinada la demanda junto con las pruebas allegadas, se observa que los Juzgados Administrativos carecemos de jurisdicción para conocer del presente asunto, razón por la cual es procedente **susitar conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá y este Despacho**, pues en consideración de este estrado judicial, el Juzgado en mención es el competente para desatar las pretensiones planteadas por el demandante.

Acorde con ello, este despacho considera que no es posible avocar el conocimiento de la demanda radicada, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

El artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2º específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, **que no provengan de un contrato de trabajo**, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” (Negrita del Despacho).

Así mismo, el artículo 104 del C.P.A.C.A., indica cuales son los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa, señalando para el efecto lo siguiente:

“ART. 104.- De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de los dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.
2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.
3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.
4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.
5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.
6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.
7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.

Parágrafo. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.

Resaltado fuera de texto

Así las cosas, descendiendo al caso concreto, se reitera que el accionante pretende dirimir un conflicto surgido con ocasión a que se dé lugar a la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y al reconocimiento y pago de la indemnización contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En este sentido, con el objeto de determinar la competencia del Despacho dentro del presente asunto, se dispuso revisar detenidamente el expediente y se logró establecer lo siguiente:

i. En certificación laboral visible a folio 13 del plenario, expedida por la ANDEAN HR SR MANAGER de Kellogg's de Colombia, se indicó, "Que **ALFREDO BARRERA SALINAS**, identificado con cedula de ciudadanía numero 79.433.473 trabajó para esta compañía desde el 14 de Junio de 1988 hasta el 28 de Febrero de 2014, con contrato a término indefinido, ocupando el cargo de GERENTE DE OPERACIONES, con un salario integral mensual de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$12.631.354) MCTE.**".

Resaltado fuera de texto

ii. De igual manera, obra en el expediente carta emitida por la ANDEAN HR SR MANAGER de Kellogg's de Colombia, en donde le informa al actor sobre la terminación del contrato de trabajo (fls. 10).

Así las cosas, es claro que el señor Luis Alfredo Barrera Salinas, no tuvo una vinculación legal y reglamentaria con el Estado, dado que su relación laboral con Kellogg's de Colombia lo fue como empleado privado, vinculado a través de contrato de trabajo.

En este orden de ideas, esta jurisdicción no es competente para conocer del presente asunto, pues en estos eventos la jurisdicción que tiene asignado el conocimiento de los mismos es la ordinaria laboral, pues así lo dispone la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 155 numeral 2º y 104 en su numeral 4.

Por lo anterior, este Despacho considera que no le asiste razón al Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, al indicar en proveído adiado 15 de noviembre de 2018, que no era el competente para conocer del asunto, pues el argumento para tomar esta decisión fue la siguiente:

*"(...) El despacho adelanta la etapa de saneamiento del litigio, y advierte la falta de jurisdicción y competencia, dado que solicita la devolución de la retención en la fuente, asunto meramente tributario, razón por la cual, se remite el proceso al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos."
(...)*

Tal como se observa, esta providencia omitió estudiar en conjunto y concordancia, los artículos 155 y 104 numeral 4º de la Ley 1437 de 2011, los

cuales son claros en establecer la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente a las controversias suscitadas entre empleados con vinculación legal y reglamentaria y entidades del Estado, dejando por fuera del ámbito de competencia, precisamente los asuntos en los cuales están involucrados empresas privadas.

Al respecto, el Consejo Superior de Judicatura, con auto de 5 de octubre de 2016, M.P. Magda Victoria Acosta Walteros, dentro del expediente 2016-01461, la Corporación señaló:

*“Corolario de lo anterior, es necesario señalar que **si no se está frente a una relación legal y reglamentaria, no le compete a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa el conocimiento del asunto en referencia y su conocimiento corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria**, tal como ha sido el precedente de esta Sala:*

*"para la Sala, estudiadas y analizadas las pretensiones, hechos y pruebas de la demanda sub-examine, no cabe duda que en el caso en particular, corresponde la misma a una demanda de carácter laboral para que se declare la existencia de un contrato de trabajo y se cancelen varias acreencias laborales con la respectiva indexación. Y en aras a resolver, surge la necesidad de establecer si el actor de dicha demanda es trabajador oficial o empleado público. Cotejados los hechos, pretensiones y pruebas de la demanda para poder dirimir el conflicto de competencia, es del caso señalar que el demandante **no tiene la calidad de empleado público**.*

[...]

*De allí que [...] se concluye que el presente caso se trata de un conflicto netamente derivado de un contrato de trabajo, en el cual el demandante pretende que se declare que entre él y el **DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA** existió una relación laboral bajo la modalidad de contrato de trabajo a término fijo o indefinido, según las afirmaciones realizadas por el demandante en su libelo demandatorio y que como consecuencia de ello, se condene a la entidad antes nombrada demandada, al pago de las prestaciones sociales legales, factores salariales convencionales y prestaciones sociales convencionales no reconocidas al actor; consecuencia de lo anterior queda claro que la competencia para conocer del conflicto de jurisdicción aquí analizado, debe adscribirse a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, representada en este caso por el Juzgado segundo Laboral del Circuito de Riohacha".*

*Es de tener en cuenta, que el actor también pretende se le paguen las prestaciones sociales y todos los demás emolumentos fruto de la relación laboral, que alega haber tenido, la cual como ya se dejó claramente expuesto **no existe prueba alguna que indique la existencia de una relación legal y reglamentaria como empleado público, y por tanto se activa***

la cláusula general de competencia de la jurisdicción laboral ordinaria señalada el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; aunado a lo anterior, se vislumbra en el plenario a folio 91 del plenario, que la naturaleza del cargo de conductor que ostentaba el demandante, es catalogada como de trabajador oficial, de conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los diferentes empleos de la planta de personal del Hospital San Cristóbal I Nivel ESE de Bogotá, situación esta que hace entrever que la Jurisdicción para conocer el presente asunto es la Ordinaria en su especialidad Laboral y de Seguridad Social.

Así las cosas y dado lo explicado en precedencia, junto con el pronunciamiento realizado por el Consejo Superior de la Judicatura, y en consideración a la situación fáctica expuesta y los medios de prueba aportados, el despacho declarará la falta de jurisdicción y promoverá el conflicto negativo de jurisdicciones con el Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito de Bogotá, pues se encuentra claramente establecido que la vinculación del demandante el señor Luis Alfredo Barrera Salinas, lo fue a través de un contrato de trabajo en una entidad privada, lo que sin lugar a dudas le asigna el conocimiento del asunto a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y no como erradamente lo sostiene el mencionado Despacho a la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

En tales circunstancias, de conformidad con el artículo 256, numeral 6º de la Constitución Política, en concordancia con lo preceptuado por el numeral 2º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, este Despacho considera necesario remitir el presente expediente al H. Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con el objeto de proceda a dirimir el conflicto negativo aquí suscitado, dado que se presenta entre Juzgados de diferentes jurisdicciones, pues tanto el Juzgado Veintidós (22) Laboral de Bogotá, como este Despacho, Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad de Bogotá, consideramos que no tenemos competencia para conocer del asunto, al tratarse de una controversia en la cual está involucrado un empleado que perteneció a un entidad de derecho privado como lo es Kelloggs de Colombia S.A.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE JURISDICCIÓN para conocer la demanda laboral promovida por el señor **LUIS ALFREDO BARRERA SALINAS** en contra de **KELLOGGS DE COLOMBIA S.A.**

SEGUNDO.- PROMOVER CONFLICTO DE JURISDICCIONES, entre este Despacho y el Juzgado Veintidós (22) Laboral del Circuito de Bogotá, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO.- REMITIR el presente expediente, una vez ejecutoriado este


proveído, **AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA - REPARTO**, con el objeto que proceda a dirimir el conflicto suscitado.

CUARTO.- Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
 Juez

FV

 <p>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA</p> <p>Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO, notifico a las partes la providencia anterior hoy 12 DE MARZO DE 2019, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)</p> <p>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA</p>
